

# Lo viejo y lo nuevo: la fractura de los vínculos solidarios

Joaquín Azagra Ros

Empezaré con una alusión a mi paso por el Colegio Mayor San Juan de Ribera, institución centenaria y ejemplar. Aprendí allí lo que por mi mismo no hubiera oído, leído ni aprendido. No me refiero tanto a la oportunidad de acumular conocimientos cuanto a la del encuentro con argumentos e ideas distintas o lo que es lo mismo, al encuentro con el «otro», al ejercicio de ciudadanía, a la comprensión de lo que es la libertad y a su través, de la democracia. Para mí, fue esencial. Descubrí algo que podría resumir en que la democracia consiste en la asunción del desacuerdo, en la integración de la diversidad, en la gestión de lo parcial, en el compromiso entre partes. Lo cual significa algo que puede sonar raro: *la democracia genera decepción*. El poder limitado y la soberanía compartida suponen aceptar «soluciones subóptimas», o sea aquellas por las que se debe pagar un precio. Éxitos y fracasos lo son siempre a medias. La libertad es la única forma digna y sensata de articular el conflicto. La victoria no consiste tanto en ganar a alguien sino en integrar a los más posibles... aunque ello suponga la renuncia a objetivos propios en aras a la cohesión colectiva.

Fue el más interesante bagaje para el trayecto que inicié al salir del Colegio, el de acompañar a tanta gente que decidió en esos años transitar el camino hacia la democracia. Porque la transición fue eso, un tira y afloja entre sectores sociales y políticos para construir un espacio de convivencia común y confortable. Un espacio en que dar cabida a todos y que por ello habría de tener una arquitectura institucional integradora. O lo que es lo mismo, tan amplia cuanto insuficiente si se referenciaba al óptimo deseado por cada fuerza política. El sentimiento agrídulce era consecuente con el perfil que adquirió el nuevo régimen. *Ilusión* en cuanto inauguraba un modelo de sociedad democrática y socialmente inclusiva; *decepción* por cuanto dejaba asuntos inacabados, temas pendientes y metas por alcanzar en futuras reformas que se olvidaron.

## EL CONTRATO FUNCIONÓ

El hoy denostado «régimen del 78» abrió un proceso de reasignación de recursos, de ajuste, reconversión y crecimiento, de modernización y de articulación de la

cohesión territorial vía Estado de las Autonomías y social a través del Estado del Bienestar, que hizo pasar a España de un IDH del 0,85 al 0,95, el 15º de todo el mundo. No es un dato más. Este índice integra los niveles de renta, sanidad y educación de los países, lo cual significa que nuestro esfuerzo de adecuación a una economía competitiva fue acompañado además de otro no menor de construcción de un sistema de bienestar y cohesión social razonable. Todo ello con la ayuda europea cuyos fondos estructurales y de cohesión devinieron determinantes. Positivo balance que, sin embargo, hoy se niega y del cual se destacan sus carencias, al punto de proponer la ruptura de los compromisos mutuos del sistema. Y se hace no apelando al contrato social sino a la disrupción, a la renuncia de nuestra mejor historia.

¿Qué ha pasado? ¿Tan mal lo hizo nuestra generación y aquellas aguas trajeron estos lodos? ¿O es sólo consecuencia de que coincida el descubrimiento de tantos y tan indignantes casos de corrupción con los desgarros generados por la crisis económica? Es claro que la confluencia de crisis y corrupción son causa de desafección de la ciudadanía respecto de los políticos y que estos han reaccionado de la peor manera posible, señalando vigas mutuas en ojos ajenos, rehuyendo la autocrítica y desconociendo que los tiempos exigen respuestas y actitudes nuevas. Pero no, ni una cosa ni otra; ni la crisis tiene la culpa de todo lo que hoy sucede, ni el ahora llamado «régimen del 78» era tan perverso. Más bien pienso que acertó no sólo en el diagnóstico de los problemas del país, sino en los modos de abordarlos vía consenso y concertación en un contexto nada apacible y a veces muy violento. La transición no fue una operación cosmética del franquismo, como se atreven hoy a decir algunos.

Pero sí hay algo de lo que responsabilizarlo: de no entender que el mundo estaba cambiando. Bauman, Touraine, Beck, Judt... hablaban de una nueva sociedad que adjetivaban según quisieran destacar alguno de sus aspectos determinantes (rota, sin brújula, de valores débiles, etc.) pero cuyo común denominador era la incertidumbre. Una incertidumbre que la crisis ha trocado en miedo, en miedo al futuro. Se formaba una sociedad distinta, con ideas, comportamientos, modos de vida, formas relacionales y demandas nuevas. Y lejos de responder a tales demandas, la política se instaló en la «cultura de la crispación» como mecanismo para ahorrar al electorado propio. Ahí se fraguó el bipartidismo pues la crispación fuerza el alineamiento del electorado. En los 90 acabó la transición y con ella el llamado «régimen del 78» mostró sus carencias, derivó en bipartidista y mermó la confianza en el sistema.

Es esta una sociedad distinta a la que surgió de la transición. Ya no es la misma, ni lo son sus gentes, ni sus ideas, ni sus modos de vida. Entre otras cosas, porque el mundo al que nos abrimos con la democracia es también otro y nos influye y condiciona. La internacionalización de nuestra economía desde 1986, coincidió con esta segunda fase de la globalización cuestionando las estructuras sobre las que se basaba el sistema.

Para empezar, cambió su estructura social pues el camino a una economía de servicios fue acompañado de un importante cambio en la estratificación clasista. Más profesionales y trabajadores de «cuello blanco», más personal en servicios con escasa exigencia de cualificación; menos trabajadores manuales, menos obreros, menos campesinos... Un dato ilustrativo: en la EPA de 1980, los obreros clásicos en industria y construcción, suponían el 33,3% de la población activa ocupada; los pequeños campesinos y los jornaleros el 15,8%. En 2007, es decir en el momento de mayor empleo de nuestra economía, los primeros eran el 26% y los segundos el 3,8. Si alguien quisiera recuperar aquello de la vanguardia revolucionaria desde la perspectiva clasista, se encontraría con que el peso relativo de las clases que le darían soporte había pasado del 48% de los trabajadores al 30%. Peor aún tras la crisis, pues hoy no llegan al 22%.

No es sólo un cambio cuantitativo. Hay mayor segmentación interna en el interior de las clases sociales tradicionales: entre clases trabajadoras y entre clases medias. En el seno de la clase obrera puede haber gran contradicción entre un trabajador con contrato fijo, salario digno y expectativa de una aceptable jubilación, respecto a otro de contrato precario, sueldo escaso y pocas esperanzas de cubrir cotizaciones suficientes para su futura pensión. O en las clases medias, entre técnicos con buenos trabajos y sueldos muy altos frente a otros, no menos cualificados, pero que se ven amenazados por el desempleo y los sueldos bajos. Por no hablar de los autónomos cuya fisonomía es tan dispersa que va desde el que lleva su negocio en el límite del fraude fiscal o el que depende de una sola empresa que ha externalizado servicios y reconvertido el contrato a quien debiera ser su asalariado. Y para final, esa extensa capa de parados y trabajadores pobres que algunos bautizan como «precariado» y definen como nueva clase social. Complejidad y diferenciación que tal vez impliquen complejidad y diferenciación de intereses y aspiraciones. Tanto que los conflictos interclasistas cada vez más ceden el paso a conflictos intraclasistas.

Han cambiado comportamientos y modos de vida. La demografía da fe de ello. No tenemos hijos y los tenemos más tarde: 1,2 hijos por mujer fértil y primer parto a los 31 años. En la transición, los mayores de 65 años eran el 11% de la población; hoy caminamos hacia el 17. El «invierno demográfico» se une al alargamiento de la esperanza de vida para hacer de la nuestra una sociedad envejecida que siendo un logro social, también plantea problemas para la financiación del gasto en pensiones, en sanidad, en farmacia, en cuidados a largo plazo, etc. Téngase en cuenta que el nuestro es un sistema de bienestar «familiarista» y la familia es una de las piezas que más han cambiado. Con ella, muchas más. Aquellos valores dominantes: la conciencia de clase y la solidaridad que sostenían el relato de la igualdad en la clase trabajadora; o el premio al trabajo bien hecho, al esfuerzo y al respeto a las leyes en clases medias y pequeña burguesía; el prestigio del Estado, etc., ceden ante el avance del individualismo, de la competitividad, del consumismo y de la medición del éxito en dinero. Las trayectorias vitales son

otras. Poco queda del esquema clásico de marido que aporta el sueldo, mujer que cuida el hogar, hijos que se forman para el futuro... La formación hoy ha de ser continua pues la obsolescencia es riesgo real.

Pero ha sucedido algo más de lo que somos conscientes poco a poco: la interdependencia entre países cuestiona los conceptos tradicionales de soberanía, autogobierno y responsabilidad ante los electores nacionales. El Estado pierde soberanía y renuncia a instrumentos antaño básicos. No hay política monetaria propia, muy poca política arancelaria pero sobre todo, ahora existen «otras» ciudadanías que sin formar parte de nuestros propios *demoi* políticos, nos afectan y son afectados por las decisiones de cada uno. Soberanía nacional suponía un concepto homogéneo de pueblo y una idea cerrada de espacio político. Ya no es así.

He dicho antes que la década de los 90 resultó determinante. Un par de hitos como símbolo de cambios: el derrumbe de la economía soviética o el nacimiento de Internet. En España se evidenciaba de muchas formas que la sociedad no era la que hizo la transición: era más vieja, más urbana, más culta, más profesionalizada, laboralmente feminizada, multicultural, con sistemas relacionales distintos y formas comunicativas nuevas. Reivindicaciones clásicas, aparecían como condiciones de vida normales y las planteadas por los movimientos sociales tenían perfiles no clasistas sino transversales: ecología, feminismo, pacifismo, aborto, matrimonio homosexual... Incluso cuando en el 93 pudo superarse sin fractura social una intensa aunque breve crisis económica, pareció que el sistema de protección social avalaba el «régimen del 78» y olvidaba las convenientes reformas de una organización territorial inacabada, de una fiscalidad insuficiente e injusta, de una protección que minimizaba la asistencia social, de un sector público poco eficiente, de una representación política cuestionada, de unos organismos de control politizados, y la aparición de los primeros ejemplos de corrupción...

Habían cambiado las cosas y entre ellas la propia valoración del consenso. No se veía ya como mecanismo de solución de los conflictos, ni en el ámbito sindical, ni en el territorial, ni en el parlamentario. Es más, se había extendido la práctica de la «crispación», importada de los EEUU y que consistía en ahormar al propio electorado a partir de la radicalización de posiciones. Algo que en el contexto de los casos de corrupción –Roldán, Ibercorp– resultaba sencillo. Fue la cultura de la crispación la que al forzar el alineamiento en bloques, rompió los compromisos entre las elites dominantes de la transición (conservadores, socialistas, nacionalistas y comunistas) quebrando compromisos centrales y abriendo una brecha con la ciudadanía. Desde los 90, no hay un centro de gravedad en el sistema.

Eso sí, al poco y en la euforia que el abrigo del euro procuró, no se echaría de menos esa carencia. Ya con gobiernos del PP, una ciudadanía alegre y confiada ignoró a los políticos y aprovechó la facilidad de crédito para endeudarse en una carrera consumista que afectó a instituciones, empresas y particulares. Lo que es

peor, apenas se les cobró peaje por el avance de la corrupción que se produjo en los años del auge.

Fue sobre esta realidad transformada, sobre la que se abatió la crisis económica. Los bajos tipos de interés hicieron que Bancos, Cajas, intermediarios financieros e inversores infravaloraran los riesgos y dieran cobertura al exceso inmobiliario, con dinero a su vez prestado en parte por la banca extranjera o captando ahorro con dudosos productos (las «preferentes» como símbolo). Lo cierto es que la inversión se desacopló respecto al incremento del PIB. Dicho de otro modo, el aumento de la riqueza era menor al de la deuda contraída y el ahorro de empresas y familias no cubría la amortización de los pasivos financieros... Gastábamos más que ingresábamos. El resultado era una economía con mayor inflación, endeudamiento y revalorización de activos inmobiliarios (o sea la famosa «burbuja») que otros países de la zona euro. Con la crisis, la confianza de los inversores tocó techo y el foco se dirigió a la devolución de préstamos.

Todo sin avisos previos. Tal parece que no hubiese habido en nuestro país mecanismos de control especializados. Ni interventores, ni auditores, ni tribunales de Cuentas, ni CNMV, ni Banco de España detectaron lo que se ha visto que a veces eran desmanes cuando no delitos. Todo no es sólo culpa del sistema. Hay quienes cobran por inspeccionar, vigilar y corregir... La corrupción y la ineficiencia no son características específicas del capitalismo...

En épocas anteriores, la respuesta a una crisis de este tipo solía partir de la devaluación de la moneda. Ello encarecía las importaciones, lo que podía reorientar la demanda interna hacia la producción propia, pero sobre todo abarataba las exportaciones, lo cual permitía ganar mercado exterior. Acompañada de medidas estabilizadoras y de consolidación fiscal –control del gasto público, de sueldos y salarios– era cuestión de tiempo y sacrificio, superar la recesión. Sacrificio, claro, pues de lo que se trata es de que la subida de precios no vaya seguida de la de los salarios y ello comporta un encarecimiento del coste de la vida. Pero tiene una virtud que radica en el carácter generalizado, simultáneo y poco selectivo de sus efectos directos, el alza de los precios y el encarecimiento del coste de la vida. La población advierte conjuntamente tales efectos y aunque haya obvias diferencias entre ricos y pobres a la hora de afrontarlos, lo visible era que los precios subían para todos por igual. Sí, claro, para unos es más fácil de asumir el alza de los precios que para otros, pero la inflación es un fenómeno general.

No ocurre así hoy. Ernest Reig lo ha explicado con brillantez. La causa estriba en que ahora simplemente, no se puede devaluar la moneda. La peseta no existe y el mismo euro que había abrigado el crecimiento, penalizaba la recesión. Sin política monetaria propia no se puede devaluar la moneda y hay que recurrir a la «devaluación interna» que genera un reparto de los costes de la crisis llamativamente diferenciado entre grupos sociales. ¿Por qué esa diferenciación en sus efectos? Puesto que se trata de reproducir el efecto de la devaluación del tipo de cambio, la bajada de los precios interiores, habrá de hacerse vía reducción de los

costes laborales y a través de medidas fiscales como el aumento del IVA, que no se repercute en los productos exportados, la reducción del impuesto sobre sociedades para alentar las expectativas empresariales y, claro, mediante la contención de gastos.

El programa opera fundamentalmente a través de medidas flexibilizadoras del empleo que buscan facilitar el despido y de paso debilitar la posición negociadora de los trabajadores para provocar la moderación salarial. La reducción de los sueldos funcionariales es un mecanismo añadido que además, recorta gasto público. En cuanto a los impuestos, no basta con elevarlos sino que se trata de desplazar la presión fiscal hacia el consumo, relajando la carga contributiva que soporta la producción y sus costes laborales. O sea, IVA *versus* cotizaciones sociales e impuesto de sociedades. Pero también vía IRPF que al gravar sobre todo a las nóminas, supone otra agresión a los asalariados. Y claro, hay que reducir el nivel de gasto público, lo que equivale a decir, por su facilidad, volumen e inmediatez, el de las prestaciones sociales. O sea, recortes en educación, en sanidad, en jubilaciones, en servicios sociales.

Las diferencias con un plan de estabilización clásico no es que sean abismales, pero sí las suficientes como para que la implementación de una «devaluación interna» sea mucho más complicada política y socialmente. La devaluación de la peseta se reflejaba en una subida de precios para todos; en la interna, hay una disminución de salarios e ingresos de otro tipo, que hace muy visible y directa la pérdida de poder adquisitivo. Y sobre todo, resulta discriminatoria porque esas rebajas no se producen a la vez y por igual en todos los colectivos sociales. Depende en gran medida de su posición negociadora, de su capacidad de presión o influencia. Ello abre un abanico de incidencias diferenciadas sobre grupos sociales. Estadísticas oficiales y analistas señalan que son los salarios bajos los que más han perdido: la caída de poder adquisitivo es mayor cuanto menor es el nivel salarial. A lo cual se suma que son los más afectados por los recortes. La calle lo visualiza más allá de los datos. Lo ve a diario en las colas del paro o en los comedores de Cáritas.

Una rifa en la que quienes más posibilidades de perder tienen son los que menos números juegan... De hecho no sólo se ha constatado un fuerte aumento de la desigualdad, sino que se detecta la reaparición del *working poors* o sea de trabajadores pobres que junto con muchos parados constituyen los que algunos califican como una nueva clase social, la del «precariado», que ha venido para quedarse durante tiempo.

La devaluación interna produce desgarros sociales. ¿Pudo hacerse de otro modo? No pocos entonces reclamamos la reedición de unos Pactos de la Moncloa que modulasen la reducción de los costes laborales unitarios no sólo vía salarial, sino a través de la mejora de la productividad y la negociación de las reformas, haciendo hincapié en la reducción de gastos no productivos. Los partidos no quisieron asumir los costes políticos de unos pactos que demandasen

sacrificios. Primero el PP que desde una demagogia expresa, negó el pan y la sal al gobierno socialista; después el PSOE que, envuelto en una fuerte crisis interna, apenas lanzó propuestas y menos ofreció colaboración. Tampoco la rigidez de los agentes sociales ayudó en la tarea.

La crisis dejará secuelas. La recuperación no será tal que resuelva a corto plazo los problemas planteados. Es previsible que mejoren los datos macroeconómicos, pero las bases circunstanciales de la recuperación –petróleo barato, bajos tipos de interés, estímulos del BCE– no son de suficiente garantía como para que arrastren a medio plazo la de la economía española si esta no procede a las reformas que consoliden el proceso generando empleo, mayor retribución al trabajo, normalización crediticia, solidez de las exportaciones... y de modo prioritario, resolviendo el drama de una acusada bolsa de pobreza que se mantendrá durante tiempo. No está claro que vayamos a tener una salida progresista a la crisis.

Y es que la globalización no nos coloca entre los ganadores del proceso. Rogoff advertía hace poco acerca de las dificultades de las economías desarrolladas para generar empleo de calidad y no faltan quienes, con Gordon, apuntan que las nuevas tecnologías eliminan más trabajos, especialmente en el espacio de la intermediación, de los que crean. Lo he dicho antes, el paradigma teórico es otro. Que el proceso globalizador haya coincidido con el estrepitoso fracaso del comunismo no es baladí. No hay alternativa al capitalismo y hasta la izquierda con posibilidades de gobierno, es más proclive a reformar el sistema que a subvertirlo. No pueden hacer otra cosa. Hay un espacio mundial para la economía y otro nacional para la política, lo cual altera el instrumento histórico para la transformación social de la izquierda, o sea el Estado cuyas dificultades para conseguir que su política nacional actúe como estabilizador del sistema económico, resultan casi insalvables. Si no se avanza en productividad, el incremento del gasto público deviene en impulso a los competidores foráneos que compiten con éxito en tu propio mercado. Y en más gasto que ha de cubrirse bien vía impuestos, lo que merma la competitividad, bien vía endeudamiento, lo que crea mayor dependencia de los mercados.

¿Mercado *versus* Estado? Muchos reaccionan contra lo que perciben como tiranía de los mercados. Minimizan que son los que amplían el espacio de la riqueza y favorecen procesos de desarrollo en nuevos países. Los sistemas que han pretendido suplir al mercado –autarquía fascista y planificación comunista– fracasaron por ello. Esto no implica, sin embargo que el Estado no tenga ya un rol en este escenario. Primero porque hasta para competir en ese mercado global su concurso deviene dirimente; segundo porque el mercado no garantiza la equidad. El Estado ha ampliado tanto su espacio y funciones, que ha devenido imprescindible para implementar políticas de desarrollo inteligente y aún más para compaginar crecimiento con cohesión social. Su reto es cómo cumplir las tres funciones en que hoy se le reclama:

1. Contribuir a promover una economía competitiva, sostenible e inclusiva. Se trata de conseguir un sector público eficiente cuya gestión sea transparente y en la que los organismos y protocolos de control sean independientes y profesionales. Sin tanto gasto e inversiones improductivas, pero manteniendo las pertinentes para asegurar el crecimiento y la cohesión. Un Estado que ayude a reorientar el modelo productivo colaborando con los agentes económicos para superar las debilidades empresariales en tamaño y en dotación de factores. Que mejore el grado de «empleabilidad» de nuestra enseñanza. Que remueva obstáculos a la libre competencia, planteados no sólo desde grandes empresas sino también desde corporativismos de todo tipo. Que priorice las políticas activas de empleo. Que persiga e impida la corrupción. Y un largo etcétera de tareas (el IVIE ha publicado sendos estudios al respecto) que afectarán intereses y hábitos arraigados por lo que no serán fáciles de implementar.
2. Reforzar la cohesión social garantizando la redistribución mediante un Estado del Bienestar que aúne criterios de universalidad y viabilidad financiera. Habrá de proponerse cambios en prioridades de gasto y formas de gestión. Donde más se advierte esta necesidad es en la de aumentar las dotaciones para las rentas de inserción ciudadana y en general, de las transferencias destinadas a luchar contra la pobreza. También en lo que afecta a la igualdad de oportunidades como la atención a la infancia, los planes de conciliación, los de dependencia y en especial de cuidado integral de la vejez. Pero estos y otros cambios habrán de abrirse paso entre presiones simultáneas y contrapuestas que reclaman a la vez ampliar y reducir los gastos sociales. Lo he dicho antes al poner como ejemplo el envejecimiento de la sociedad cuyos efectos sobre el gasto en pensiones, farmacia, sanidad y cuidados de larga duración amenazan la sostenibilidad del sistema. O el posible enquistamiento del riesgo de pobreza. O las necesidades formativas. Habrá que hacer mejor hasta lo que ya se hace bien. Quizás haya que desburocratizar y personalizar servicios y prestaciones, evaluar las políticas sociales *ex-ante* y *ex-post*, implicar actores nuevos en la gestión y tal vez explicar la diferencia entre precios y tasas. Porque universalidad y gratuidad no son sinónimos. No es descabellado y sí más justo, definir unas tasas en función del perfil y condiciones del usuario. Los copagos tienen afán recaudatorio, las tasas ajustadas a la condición del usuario, lo tienen racionalizador. En todo caso, hay que buscar respuestas personalizadas porque las trayectorias vitales se han diversificado ya.
3. Debe recuperarse la confianza en la democracia y vincular la búsqueda de la eficiencia, al criterio de las mayorías políticas expresadas en las urnas. Y es esta una cuestión previa. El problema es que las estructuras institucionales que habrían de acometer la tarea de repensar, reformular e imple-



mentar las propuestas están más que cuestionadas, de hecho inservibles sin su reforma previa. Por ejemplo, se han adoptado medidas en la lucha contra la corrupción, en la transparencia de la gestión, en el control de los desahucios y otros temas que sin embargo no calan en la opinión pública. Los actuales partidos y en especial el que sostiene al gobierno, no tienen credibilidad alguna. Hasta que un Parlamento más adecuado a la realidad actual no sancione nuevas leyes con apoyo mayoritario, no calarán. Diré algo más, restaurar la confianza ciudadana pasa por lo que llamaría un «desempoderamiento» de los partidos políticos. No habrá credibilidad en instituciones a las que se exige independencia y profesionalidad (véase el caso de los Consejos de Poder Judicial o de Radiotelevisión) si los partidos siguen eligiendo por cuotas a quienes han de componerlas. En realidad, habrá de hacerse un esfuerzo por recomponer los protocolos de actuación pública, reforzar las funciones controladoras, auditoras e interventoras y otro largo etcétera de reformas que configuran una tarea de desescombro y regeneración indispensables para sellar la fractura entre ciudadanos e instituciones, como paso previo para reformas de calado, las que implican al sistema electoral, al fiscal, al administrativo, al territorial...

Es este un país necesitado de reformas. Reformas que se sitúan entre el realismo que asume los condicionamientos del mercado y la audacia de gobernarlo para que la creación de riqueza se traduzca en un más justo reparto. Reformas que afectarán a intereses creados y hábitos arraigados. No sólo en sectores monopolistas o en grandes empresas, también en espacios de comportamiento gremial o en capas populares donde hay malas prácticas instaladas desde tiempo. Dicho de otro modo, reformas que provocarán rechazos diversos y por lo mismo, exigirán amplios respaldos. ¿O alguien piensa que con una simple mayoría parlamentaria y el nivel actual de confianza ciudadana, se puede hacer una reforma fiscal que aumente la capacidad recaudatoria y redistributiva del sistema? ¿O una alternativa constitucional al Estado de las Autonomías que dé solución al problema territorial? ¿O reformar el sistema educativo en la perspectiva de su estabilidad a medio plazo? ¿O aceptar formas nuevas en la provisión del Estado del Bienestar para hacerlo financieramente viable, manteniendo su carácter público y universal?

El partido gobernante pone el énfasis en la estabilidad. Pero su trayectoria reciente no avala la propuesta y hace pensar más en el inmovilismo que en la estabilidad. Porque aun admitiendo lo inevitable de muchas medidas de ajuste y consolidación fiscal tomadas por el gobierno del PP, habrá de convenirse que en gran medida han derivado en un retroceso de derechos y en recortes de gasto social. Reformas racionalizadoras de la administración ha habido pocas, de liberalización de los mercados ante los abusos de las grandes compañías tampoco, de reducción de gastos improductivos las mínimas. En cambio, el listado de lo

que llamamos «recortes» es tan largo como sabido. Si la continuidad de esas políticas es lo que se entiende por estabilidad, el futuro del país es más que incierto. El término reformismo no puede identificarse con la realidad de los recortes. El reformismo ha sido motor de desarrollo económico y social.

Por otra parte, ha aparecido –Podemos– quien sostiene que la clave radica en sustituir «lo viejo» por «lo nuevo» mediante un enfrentamiento entre élites y pueblo, entre casta y gente. Creo que no es un buen análisis y desde luego, no adecuado para un país que, pese a los estragos de la crisis, sigue siendo un país europeo y moderno. Pudo tener sentido en los países latinoamericanos en que las ideas de Laclau tuvieron más influencia. Países donde en efecto existían y aún existen sectores mayoritarios de la sociedad en riesgo de pobreza y exclusión y el concepto de gente o de pueblo puede marcar una frontera política significativa. Pero aquí no existe un conjunto social mayoritario y homogéneo que se identifique con el concepto de gente o pueblo. Ésta es una sociedad muy fragmentada y poco homogénea cuyos intereses dispares e incluso contradictorios, demandan finura analítica y capacidad negociadora para articular mayorías de apoyo a un proyecto que haga compatibles crecimiento y redistribución.

Por su trayectoria histórica, correspondería la iniciativa reformista al socialismo democrático, pero en las circunstancias actuales su protagonismo es dudoso. Aunque el PSOE limpiase su propia contaminación respecto al deterioro democrático, habría de bregar con realidades hostiles para él. La transformación de sus bases sociales que hacen inviable la reedición del «bloque social de progreso» de los 80; la pérdida de autonomía de su instrumento fundamental o sea el Estado, sujeto a condiciones externas impuestas por áreas económicas supranacionales; y un discurso debilitado por cuanto también lo está el keynesianismo que le da soporte. El relato de salvar el Estado del Bienestar es menos heroico que fuera el de construirlo.

En ese contexto, las encuestas apuntan a un escenario pluripartidista. Ni es casual ni debe verse como negativo. Primero porque responde a la segmentación citada que al diferenciar sectores de las clases medias y trabajadoras, ha reducido el espacio del centro político y hecho más complejo el espectro de la izquierda. Resulta coherente que tras el fracaso de los dos partidos abrumadoramente hegemónicos, se fragüe una recomposición política tanto en la derecha como en la izquierda. Segundo, porque ha ampliado el debate político interesando en él a más personas, en particular a los jóvenes y ha dado opción a abstencionistas e indignados cuyo malestar no encontraba vehículo de participación. Y tercero, porque sin más, ha recuperado la necesidad del diálogo y la negociación al sustituir el modelo de partido dominante por el de poderes compartidos.

Cierto es, no obstante, que esa ampliación del debate ha comportado una pérdida de rigor en el mismo y algo de banalización en las propuestas. Hasta ahora, esa llamada al diálogo se hace desde la perspectiva de la formación de gobiernos viables, no desde la perspectiva de un proyecto a medio plazo. Creo que

la situación va más allá de la estabilidad. Requiere cambios. Ahí está la dificultad, en combinar estabilidad y cambio. Si antes he citado la transición como un ejercicio de consensos, añadiré ahora que fueron posibles porque existieron vínculos básicos en una mayoría de ciudadanos en busca de una España democrática, moderna, europea, competitiva e inclusiva. El ejemplo de los Pactos de la Moncloa, comprometiendo a sindicatos y partidos en el ajuste y reconversión del sistema productivo a cambio de democracia, descentralización autonómica y Estado del Bienestar, es quizás su punto culminante pero tuvo continuidad durante los 80. Ciertamente que poco a poco, la cultura del pacto fue limitándose a negociar con los nacionalismos su apoyo parlamentario a cambio de cesiones de soberanía y, las más veces, a cambio de inversiones. Una deriva que antes he dicho, condujo a la fractura del modelo en los 90.

Quizás falte hoy ese proyecto común al que dotar de contenido para descubrir el sentido del diálogo. No es fácil verlo en los programas electorales, más parecidos a un listado de medidas yuxtapuestas no siempre coherentes entre sí. Se echa de menos un «relato» que de sentido y coherencia a las propuestas partidistas. Casi lo contrario ocurre con los movimientos sociales alineados en el espacio de la indignación. Existe relato pero no proyecto. Es lógico, estar indignado puede estar justificado pero no confiere la razón a quien lo está ni lo hace portador de un proyecto coherente, adecuado y/o viable. Y el caso es que tal vez no haya que inventarlo. En esencia se trata de algo parecido al que concitó apoyos mayoritarios en la transición: una democracia transparente, representativa y participativa cuyos mecanismos de control funcionen e impidan la corrupción; una economía competitiva y adecuada al escenario global en que se mueven los mercados; un Estado del Bienestar público, universal y financieramente viable...

Aceptaré que algunos estén pensando que propongo un capitalismo solidario y eso es un oxímoron. Pero es lo que hay. El crecimiento está en función de la adaptación a las realidades del mercado. Sin crecimiento no será posible el bienestar, sin solidaridad fiscal no habrá cohesión social. Quizás pueda parecer un proyecto poco heroico pero no lo es y es indispensable acometerlo ya. Fue posible en otros tiempos. No hay razones para que no vuelva a serlo. La cuestión estriba ahora en cómo restablecer esas dosis de rigor con lenguajes actuales y a partir de eso, reforzar los vínculos comunes que sirvan para articular un proyecto de país. No hay mejor mecanismo que el ejercicio de la democracia. Sí, lo he dicho al principio, es un sistema defectuoso y algo decepcionante, tal vez lento en sus actuaciones pero adoptadas tras un proceso público racional y argumentativo.

El mensaje que encierran las encuestas consiste en que ese proyecto no debe ser llevado por una fuerza hegemónica sino mediante acuerdos entre varias. De algún modo se está volviendo a los 70, lejos de las que el tiempo ha mostrado como indeseables mayorías absolutas. Quien sea capaz de asumir el liderazgo de un proyecto que exige sacrificios podrá marcar la agenda de los necesarios debates. Pero no suplirlos, porque para la democracia el pueblo no es un todo

homogéneo sino un conjunto plural con intereses y conflictos que se resuelven por procedimientos reglados y poderes sometidos a normas jurídicas y controles externos. Proyecto, liderazgo y ejercicio de la democracia.

.....  
JOAQUÍN AZAGRA ROS es doctor en Historia y profesor de Historia Económica en la Universitat de València. Ha ocupado diversos cargos académicos y políticos, entre ellos el de Conseller de Administració Pública de la Generalitat Valenciana. Es autor, entre otros, de *Actividad y territorio: un siglo de cambios* (2007) y *País complex* (2007, con Joan Romero). El origen del presente artículo es la conferencia pronunciada por el autor en la Universitat de València con motivo del centenario del Colegio Mayor San Juan de Ribera.